

No. 43397

**Colombia
and
Panama**

Agreement on legal assistance and mutual legal cooperation between the Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic of Panama. Panama City, 19 November 1993

Entry into force: *10 October 1999 by notification, in accordance with article XVIII*

Authentic texts: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Colombia, 2 January 2007*

**Colombie
et
Panama**

Accord relatif à l'assistance juridique et à la coopération mutuelle judiciaire entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Panama. Panama, 19 novembre 1993

Entrée en vigueur : *10 octobre 1999 par notification, conformément à l'article XVIII*

Textes authentiques : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Colombie, 2 janvier 2007*

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

**ACUERDO SOBRE ASISTENCIA LEGAL Y COOPERACION JUDICIAL MUTUA ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE PANAMA**

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá;

ANIMADOS por el propósito de intensificar la asistencia legal y la cooperación en materia penal;

RECONOCIENDO que la lucha contra la delincuencia requiere de la actuación conjunta de los Estados;

TOMANDO EN CONSIDERACION los lazos de amistad y cooperación que los unen como países vecinos;

EN OBSERVANCIA de las normas constitucionales, legales y administrativas de sus Estados, así como el respeto a los principios de Derecho Internacional, en especial de soberanía, integridad territorial y no intervención;

DESEOSOS de adelantar acciones conjuntas de prevención, control y represión del delito en todas sus formas, a través de la coordinación de acciones y ejecución de programas concretos; y de agilizar los mecanismos tradicionales de asistencia legal y judicial;

CONSCIENTES del incremento de la actividad delictiva en zonas fronterizas, convienen en prestarse la más amplia cooperación, de conformidad con el procedimiento que se describe a continuación:

ARTICULO I

OBJETO DE LA ASISTENCIA

Las Partes de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo y con estricto cumplimiento de sus respectivos ordenamientos jurídicos, se comprometen a:

1. Prestarse asistencia legal y judicial en forma recíproca;
2. Brindarse la mayor colaboración en materia de expulsión, deportación y entrega de extranjeros perseguidos por la justicia que se encuentren irregularmente en la Zona Fronteriza de los Estados Parte.

ARTICULO II

APLICACION Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA

1. Las Partes se prestarán asistencia mutua en intercambio de información y pruebas, investigaciones, juzgamientos, y actuaciones en materia penal.

Dicha asistencia comprenderá entre otros, los siguientes actos:

- a. Práctica y remisión de las pruebas y diligencias judiciales solicitadas;
- b. Remisión de documentos e informaciones de conformidad con los términos y condiciones del presente Acuerdo;
- c. Notificación de providencias, autos y sentencias;
- d. Localización y traslado voluntario de personas para los efectos del presente Acuerdo, en calidad de testigos o peritos;
- e. Proceder a la ejecución de órdenes judiciales que versen sobre inmovilización y decomiso de bienes, productos e instrumentos con los que se haya cometido el delito o que provengan de su ejecución, de conformidad con el ordenamiento interno del Estado Requerido.
- f. El Estado Requerido, hará una consideración especial para decidir con el Estado Requirente la forma como se repartirá tanto los bienes objeto del decomiso como, de ser el caso, el producto de su venta, entre las dos Partes. Lo anterior, teniendo en cuenta el grado de colaboración aportado así como la información suministrada.
- g. Facilitar el ingreso y permitir la libertad de movilidad interna en el territorio del Estado Requerido a funcionarios del Estado Requirente, previa autorización de las autoridades competentes del Estado Requerido, con el fin de asistir a la práctica de las actuaciones descritas en el presente Acuerdo, siempre que el ordenamiento interno del Estado Requerido así lo permita.
- h. Cualquier otra asistencia acordada entre Las Partes.

ARTICULO III

ASISTENCIA EN LA FRONTERA

Además de la asistencia legal y judicial descrita en el artículo II, Las Partes se comprometen a brindarse la más amplia colaboración en la zona fronteriza, en los siguientes términos:

1. El nacional de una de Las Partes que sea solicitado por las autoridades judiciales de su país, por virtud de una medida que implique su privación de la libertad, y que para eludirla haya ingresado a la zona fronteriza del otro Estado Parte, será deportado o expulsado del territorio del Estado donde se encuentre, por las autoridades competentes, y conducido a la frontera para su entrega a los agentes del Estado Requirente.

El anterior procedimiento se efectuará, de acuerdo con el Régimen de Extranjería vigente en cada Estado, de manera que siempre se respeten los derechos y garantías del afectado.

2. Recibido un requerimiento de asistencia, por la Autoridad Central de uno de los Estados parte, ésta deberá comunicar dicho requerimiento de manera expedita a los funcionarios encargados del control de inmigración, enviando la documentación pertinente a fin de que presten su concurso con la mayor celeridad, para la adopción de las medidas de expulsión o deportación y entrega del extranjero a las autoridades del Estado Requirente.

Para estos efectos, actuarán como Autoridades Centrales, las indicadas en el Artículo IV del presente Acuerdo.

3. Para los efectos de la asistencia a la que se refiere este artículo se entenderá por zona fronteriza la que determinen ambas Partes.

ARTICULO IV

AUTORIDADES CENTRALES

Los requerimientos de asistencia en virtud de este Acuerdo se efectuarán a través de las Autoridades Centrales competentes, tal como se indica en el presente enunciado:

1. Por la República de Panamá la Autoridad Central será el Ministerio de Gobierno y de Justicia.
2. a) Por la República de Colombia la Autoridad Central competente será la Fiscalía General de la Nación.
b) Para los procedimientos relativos a la inmovilización de activos, decomiso de bienes y efectos producto de actividades ilícitas o vinculadas a dichas actividades, que se realicen como resultado del presente Acuerdo, la Fiscalía General de la Nación informará de tales requerimientos al Ministro de Justicia y del Derecho.

ARTICULO V

PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACION

1. La asistencia se prestará cuando el hecho que la origine sea punible según la legislación de ambos Estados.

ARTICULO VI

CONFIDENCIALIDAD

1. El Estado Requerido mantendrá en reserva el requerimiento de asistencia, salvo que su levantamiento sea necesario para ejecutar el requerimiento.
2. Si para el cumplimiento o ejecución del requerimiento fuere necesario el levantamiento de la reserva, el Estado Requerido solicitará su aprobación a el Estado Requirente, sin la cual no se ejecutará el requerimiento.
3. El Estado Requirente mantendrá la confidencialidad de las pruebas e información proporcionadas por el Estado Requerido, en virtud del presente Acuerdo, salvo que su levantamiento sea necesario para la investigación o procedimientos descritos en el requerimiento.
4. El Estado Requirente no utilizará para finalidades que no sean las declaradas en un requerimiento, pruebas o información obtenidas como resultado del mismo, sin el consentimiento previo del Estado Requerido.

ARTICULO VII

DENEGACION DE ASISTENCIA

La Autoridad Central del Estado Requerido podrá negar la asistencia cuando a su juicio:

- a. La solicitud de asistencia sea contraria a su ordenamiento jurídico o no sea conforme a las disposiciones de este Acuerdo;
- b. Considere que el cumplimiento de una solicitud puede obstaculizar una investigación o proceso penal en curso en dicho Estado. No obstante, el otorgamiento de dicha solicitud de asistencia podrá ser aplazada o condicionada en la forma en que se considere necesaria. En tal caso, la Autoridad Central del Estado Requerido así lo notificará a la Autoridad Central del Estado Requirente;
- c. La solicitud de asistencia se refiere a un delito respecto del cual la persona ha sido exonerada de responsabilidad penal definitivamente, o habiéndose condenado se hubiere extinguido la pena;
- d. La investigación haya sido iniciada con el objeto de procesar o discriminar en cualquier forma a una persona o grupo de personas por razones de raza, sexo, condición social, nacionalidad, religión o ideología;
- e. El otorgamiento de la asistencia pudiese afectar el orden público, la soberanía, la seguridad o los intereses públicos fundamentales del Estado requerido;

En todo caso, el Estado Requerido informará por escrito a el Estado Requirente de la denegación de la asistencia.

ARTICULO VIII

REQUISITOS FORMALES

1. Las solicitudes de asistencia deben formularse por escrito y contener la siguiente información:
 - a. La autoridad competente que tiene a su cargo la investigación o el proceso;
 - b. Propósito de la solicitud y descripción de la asistencia solicitada;
 - c. Descripción de los hechos que constituyen el delito objeto de la asistencia, de conformidad con la legislación del Estado Requirente. Deberá adjuntarse o transcribirse el texto de las disposiciones legales pertinentes;
 - d. Detalle y fundamento de cualquier procedimiento particular que La Parte requirente desea que se siga;
 - e. El término dentro del cual el Estado Requirente desea que la solicitud sea cumplida;

2. Según la naturaleza de la asistencia solicitada, también se incluirá:
 - a. La información disponible sobre la identidad y la residencia o domicilio de la persona a ser localizada;
 - b. La identidad y la residencia o domicilio de la persona que debe ser citada o notificada y la relación que dicha persona guarda con el proceso;
 - c. La identidad y la residencia o domicilio de las personas que sean solicitadas para la práctica de pruebas;
 - d. La descripción del lugar objeto de registro y de los objetos que deben ser aprehendidos;
 - e. Una descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita la inmovilización o decomiso, o que se considera están disponibles para la inmovilización o decomiso, y su relación con la persona contra quien se inició o se iniciará un procedimiento judicial;
 - f. Cuando corresponda, una declaración de la suma que se desea inmovilizar y decomisar;
 - g. Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la solicitud.

3. Si el Estado Requerido considera que la información contenida en la solicitud no es suficiente para permitir el cumplimiento de la misma, puede solicitar información adicional a el Estado Requirente.

ARTICULO IX

ENTREGA DE DOCUMENTOS Y OBJETOS

1. Cualquier documento, registro u objeto que haya sido entregado al Estado requirente, bajo los términos del presente Acuerdo deberá ser devuelto al Estado requerido una vez se cumpla la comisión para la cual fue solicitado, dentro del menor tiempo posible, a menos que el Estado Requerido renuncie a este derecho de manera expresa.
2. Ambas Partes deberán proteger los intereses que terceros de buena fe puedan tener sobre los objetos que sean entregados en virtud de una solicitud de asistencia.

ARTICULO X

LIMITACIONES EN EL USO DEL PRESENTE ACUERDO

1. El Estado Requirente no usará ninguna información o prueba obtenida mediante este Acuerdo para fines distintos a los declarados en la solicitud, sin previo consentimiento del Estado Requerido.
2. Este Acuerdo no faculta a Las Partes para ejecutar, en el territorio del Estado donde se realizan las diligencias, funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de dicho Estado de conformidad con su legislación interna.
3. Este Acuerdo no se aplicará a:
 - a. La detención de personas con el fin de que sean extraditadas, ni a las solicitudes de extradición;
 - a. La transferencia de procesos penales;
 - b. La transferencia de reos con el objeto de que cumplan sentencia penal.
 - c. La asistencia a particulares ni a terceros Estados.

ARTICULO XI

EJECUCION DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA

1. Conforme a este Acuerdo las pruebas que se practiquen por las autoridades de la Parte Requerida se ejecutarán de conformidad con el ordenamiento jurídico de este Estado. La valoración de

dichas pruebas se registrará por el ordenamiento interno de la Parte Requirente.

2. El Estado requerido fijará la fecha y sede de la ejecución de la solicitud de asistencia y las comunicará al Estado requirente, si fuere del caso.
3. El Estado Requerido de conformidad con su derecho interno y a solicitud de la Parte Requirente, podrá recibir declaración jurada de personas dentro de un proceso que se siga en el Estado Requirente y solicitar la evacuación de las pruebas necesarias de conformidad con los procedimientos especificados en la petición.
4. El interrogatorio debe ser presentado por escrito, y el Estado requerido después de evaluarlo, decidirá si procede o no.
5. Con fines probatorios, el Estado Requerido por solicitud de la Parte Requirente podrá facilitar copias de documentos oficiales, antecedentes o informaciones que reposen en un organismo o dependencia gubernamental de dicho Estado.
6. Las pruebas practicadas por las Autoridades Competentes del Estado Requerido, en originales o copias autenticadas, serán trasladadas a la Parte Requirente a través de la Autoridad Central definida en el presente Acuerdo.

ARTICULO XII

NOTIFICACION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

1. A solicitud de la Parte Requirente y en la medida de lo posible, el Estado Requerido diligenciará cualquier citación, notificación o entrega de documentos relacionados con una solicitud de asistencia, o que forme parte de ella, de conformidad con su ordenamiento jurídico.
2. El Estado requerido devolverá una constancia de haber efectuado la diligencia, de acuerdo a la solicitud de asistencia.

ARTICULO XIII

COMPARECENCIA DE TESTIGOS Y PERITOS

1. Por solicitud del Estado Requirente, cualquier persona que se encuentre en territorio del Estado Requerido, podrá ser notificada o citada a comparecer o a rendir informe ante la autoridad competente para prestar testimonio o aportar documentos, antecedentes y elementos de prueba, de conformidad con la legislación del Estado Requerido.

2. Previa solicitud del Estado Requirente, la Autoridad Central del Estado Requerido informará con antelación la fecha y el lugar en que se realizará la recepción del testimonio o de la prueba pericial.
3. Cuando el Estado Requirente solicite la comparecencia de una persona en su territorio, para rendir testimonio o informe, el Estado Requerido citará o notificará al testigo o perito a comparecer en forma voluntaria ante la autoridad competente del Estado Requirente y sin utilizar medidas conminatorias o coercitivas. Si se considera necesario la Autoridad Central de la Parte Requerida, hará constar por escrito el consentimiento de la persona a comparecer en el Estado Requirente. La Autoridad Central del Estado Requerido informará con prontitud a la Autoridad Central del Requirente de dicha respuesta.
4. Si la persona citada o notificada para comparecer o rendir informe o proporcionar documentos en el Estado Requerido invocara inmunidad, incapacidad o privilegios bajo las leyes del Estado Requirente, su reclamo será dado a conocer a éste a fin de que resuelva lo pertinente.
5. El Estado Requerido enviará a la Parte Requirente una constancia de haberse efectuado la notificación o la citación, detallando la manera y fecha en que fue realizada.

El Estado al que se traslade el testigo o perito, cuando dicha persona haya aceptado cooperar con una solicitud de asistencia, velará por su seguridad personal.

ARTICULO XIV

GARANTIA TEMPORAL

1. Ninguna persona citada o notificada a comparecer en calidad de testigo o perito en el territorio del Estado Requirente en cumplimiento de una solicitud de asistencia podrá ser sindicada o procesada, detenida o sujeta a cualquier restricción de su libertad personal por razón de los actos u omisiones que hubiere cometido con anterioridad a su partida hacia el Estado Requirente.
2. La Garantía contemplada en este Artículo, salvo caso fortuito o fuerza mayor, caducará si diez (10) días después de haber notificado a dicha persona que ha cumplido la diligencia para la cual fue solicitada, no abandone el Estado Requirente, o que, habiéndolo hecho, regrese por su voluntad a dicho Estado.

ARTICULO XV

DE OTRAS DILIGENCIAS PROBATORIAS

Las Partes podrán convenir la realización de otras diligencias probatorias contempladas por su ordenamiento interno y que no hayan sido mencionadas en el presente Acuerdo. Dichas diligencias serán tramitadas y ejecutadas de acuerdo con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

ARTICULO XVI

COSTOS

1. Los gastos ordinarios que ocasione la ejecución de una solicitud serán sufragados por el Estado Requerido, salvo que los Estados hayan decidido otra cosa. Cuando se requieran para este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados se consultarán para determinar los términos y condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos.
2. Los honorarios de peritos, gastos de viaje, alojamiento e incidentales de testigos o peritos que deban trasladarse en virtud de un requerimiento de asistencia, incluyendo aquellos de los funcionarios que los acompañen, correrán por cuenta del Estado Requirente.

ARTICULO XVII

DISPOSICIONES FINALES

Las Autoridades Centrales celebrarán consultas en fechas acordadas con el fin de evaluar la asistencia prestada en desarrollo del presente Acuerdo.

La asistencia y los trámites previstos en el presente Acuerdo no tienen la intención de impedir que cualquiera de Las Partes asista a la otra de conformidad con las disposiciones de otros Acuerdos Internacionales de los cuales sean Parte o de su legislación interna. Las Partes también podrán prestarse asistencia de conformidad con cualquier otro acuerdo, tratado, convenio o práctica bilateral vigente aplicable.

ARTICULO XVIII

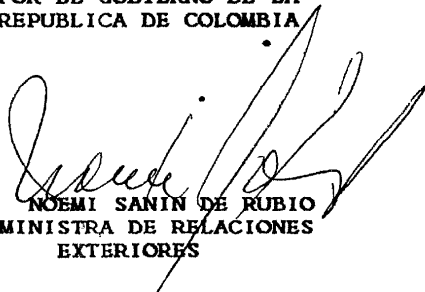
VIGENCIA Y TERMINACION

1. Cualquier controversia que pueda surgir de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo será solucionada entre las Autoridades Centrales y en caso de no llegar a un acuerdo, se recurrirá a consultas entre las dos Partes.
2. El presente Acuerdo entrará en vigor a los sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que Las Partes Contratantes se comuniquen por notas diplomáticas el cumplimiento de sus requisitos internos.

3. El presente Acuerdo podrá ser denunciado por una de Las Partes en cualquier momento, mediante nota diplomática la cual surtirá efectos seis (6) meses después de la fecha de recepción por la otra Parte Contratante.

Suscrito en la Ciudad de Panamá, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 1993, en dos ejemplares, cada uno en idioma español, siendo ambos textos igualmente válidos y auténticos.

**POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA**

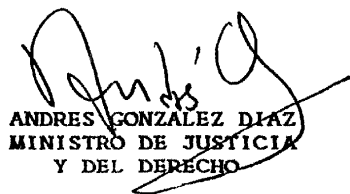


**NOEMI SANIN DE RUBIO
MINISTRA DE RELACIONES
EXTERIORES**

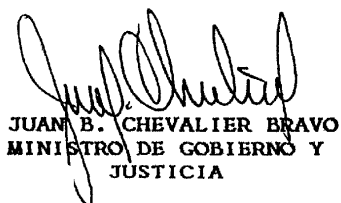
**POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE PANAMA**



**JOSE RAUL MUÑOZ
MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES**



**ANDRES GONZALEZ DIAZ
MINISTRO DE JUSTICIA
Y DEL DERECHO**



**JUAN B. CHEVALIER BRAVO
MINISTRO DE GOBIERNO Y
JUSTICIA**

[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT ON LEGAL ASSISTANCE AND MUTUAL LEGAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA

The Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic of Panama,

Motivated by a desire to strengthen legal assistance and cooperation in criminal matters;

Recognizing that the fight against crime requires the joint action of States;

Bearing in mind the ties of friendship and cooperation that unite them as neighbouring countries;

Respecting the constitutional, legal and administrative norms of their States and the principles of international law, especially that of sovereignty, territorial integrity and non-intervention;

Wishing to take joint action to prevent, control and suppress crime in all its manifestations through the coordination of activities and the implementation of specific programmes and to streamline the traditional mechanisms of legal and judicial assistance;

Aware of the increase in criminal activity in border areas, agree to cooperate with each other to the fullest extent possible in accordance with the following procedure:

Article I. Purpose of the assistance

In fulfilment of the provisions of this Agreement, and in strict compliance with their respective laws, the Parties undertake to:

1. Provide legal and judicial assistance on a reciprocal basis;
2. Provide the fullest possible collaboration in the expulsion, deportation and surrender of prosecuted foreign nationals who are in an irregular situation in the border area of the States Parties.

Article II. Implementation and scope of the assistance

1. The Parties will provide mutual assistance in the exchange of information and evidence, investigations, trials and actions in criminal matters.

This assistance shall include the following acts, among others:

- (a) Conducting of preliminary judicial inquiries where requested and indicating the results;
- (b) Transmittal of documents and information in accordance with the terms and conditions of this Agreement;
- (c) Notification of procedural decisions, orders and final decisions of the court;

- (d) Location and voluntary transfer of witnesses or experts for the purposes of this Agreement;
- (e) Execution of judicial orders for the freezing and confiscation of the property, proceeds from and instruments used in the committing of a crime, or arising therefrom, pursuant to the domestic laws of the requested State.
- (f) The requested State and the requesting State shall hold specific discussions on how to divide the confiscated assets, and the proceeds from their sale, as the case may be, between the two Parties, taking into account the degree of collaboration provided and the information communicated.
- (g) Facilitating entry into and granting freedom of internal movement within the territory of the requested State to officials of the requesting State, so that, subject to authorization by the competent authorities of the requested State, they may be present at the execution of the actions described in this Agreement, provided that the internal legal system of the requested State so permits; and
- (h) Such other form of assistance as the Parties may agree upon.

Article III. Assistance at the border

In addition to the legal and judicial assistance described in article II, the Parties undertake to cooperate extensively in the border area, as follows:

1. A national of one State Party who, pursuant to a measure which entails the deprivation of his or her liberty, is sought by the judicial authorities of his or her country and who has entered the border area of the other State Party in order to evade capture, shall be deported or expelled from the territory of the State in which he or she is present by the competent authorities and driven to the border to be surrendered to the agents of the requesting State.
The above procedure shall be carried out in accordance with the aliens legislation in force in each State and in such a way that the rights and guarantees of the affected person are always respected.
2. The central authority of a State Party shall, on receipt of a request for assistance, communicate the request without delay to the immigration control officials, together with the relevant documentation, so as to enlist their assistance forthwith in adopting measures to expel or deport and surrender the alien to the authorities of the requesting State.
For these purposes, the bodies designated in article IV of this Agreement shall act as central authorities.
3. For the purposes of the assistance referred to in this article, “border area” means the area identified as such by both Parties.

Article IV. Central authorities

Requests for assistance under this Agreement shall be made through the competent central authorities, as outlined below:

1. The Republic of Panama designates the Ministry of Governance and Justice as its central authority.
2. (a) The Republic of Colombia designates the Office of the Prosecutor General of the Nation as its competent central authority.
(b) For procedures undertaken pursuant to this Agreement involving the freezing of assets, confiscation of the property and proceeds of illegal activities, or relating thereto, the national Office of the Prosecutor General shall report such requests to the Minister of Justice and Law.

Article V. Principal of Double Incrimination

Assistance shall be provided when the act to which it relates is an offence under the legislation of both Parties.

Article VI. Confidentiality

1. The requested State shall maintain the request for assistance in reserve, unless lifting such confidentiality is necessary to execute the request.
2. If it is necessary to lift the reserve for the purpose of fulfilling or executing the request, the requested State shall seek approval thereof from the requesting State; otherwise the request shall not be executed.
3. The requesting State shall preserve the confidentiality of all evidence and information provided by the requested State under this Agreement, unless the lifting of such confidentiality is necessary for the investigation or procedures described in the request.
4. The requesting State shall not use any evidence or information obtained as a result of the request for purposes other than those stated therein, without prior consent from the requested State.

Article VII. Refusal of assistance

The central authority of the requested State may refuse assistance when, in its opinion:

- (a) The actions requested are prohibited by its law or contrary to the provisions of this Agreement;
- (b) The fulfilment of a request may obstruct an ongoing criminal investigation or proceeding in that State. Nonetheless, the granting of the request for assistance may be postponed or made conditional as deemed necessary, in which case the central authority of the requested State shall notify the central authority of the requesting State accordingly;
- (c) The request for assistance relates to an offence for which the person in question has been finally acquitted of criminal responsibility, or, if sentenced, the penalty has expired;

- (d) The investigation has been initiated for the purpose of proceeding or discriminating in some way against a person, or group of persons, on the grounds of race, sex, social condition, nationality, religion or ideology;
- (e) The granting of the assistance could have repercussions on the public order, sovereignty, security or vital public interests of the requested State;

In all cases, the requested State shall provide written notification of its refusal to provide assistance to the requesting State.

Article VIII. Formal requirements

1. Requests for assistance shall be made in writing and indicate the following information:

- (a) The competent authority responsible for the investigation or proceedings;
- (b) The purpose of the request and a description of the assistance requested;
- (c) A description of the acts constituting the crime in respect of which assistance is being sought, in conformity with the legislation of the requesting State. The text of the duly certified applicable legal provisions shall be reproduced therein or attached.
- (d) Details of and grounds for any particular matter or procedure that the requesting Party may wish to be followed;
- (e) The deadline by which the requesting State would like its request to be fulfilled.

2. Depending on the nature of the judicial assistance requested, the request shall also include:

- (a) All available information on the identity and residence or domicile of the person to be located;
- (b) The identity and residence or domicile of the person to be summoned or notified and the relationship of that person to the proceedings;
- (c) The identity and residence or domicile of persons being called to provide evidence;
- (d) The description of the place to be searched and of objects to be seized;
- (e) A description of the property in respect of which freezing or confiscation is requested, or which is considered to be available for freezing or confiscation, and its relationship to the person against whom judicial proceedings have been or are about to be instituted;
- (f) A statement of the amount it is desired to freeze or confiscate, where appropriate;
- (g) Such other information as may be necessary for the fulfilment of the request.

3. If the requested State considers that the information contained in the request is not sufficient to enable the request to be dealt with, it may request additional information from the requesting State.

Article IX. Transmittal of documents and objects

1. Any document, record or object that has been transmitted to the requesting State under the terms of this Agreement, shall be returned to the requested State as soon as possible after the purpose for which it was requested has been fulfilled, unless the requested State expressly renounces this right.

2. Both Parties shall protect the interests of bona fide third parties in respect of objects transmitted in response to a request for assistance.

Article X. Restrictions on the use of this Agreement

1. The requesting State shall not use any information or evidence obtained through this Agreement for purposes other than those declared in the request, without prior consent by the requested State.

2. This Agreement does not authorize the Parties to execute, in the territory of the State in which the actions are undertaken, functions reserved exclusively to the authorities of that State under its domestic legislation.

3. This Agreement shall not apply to:

- (a) The detention of persons for the purpose of extradition, or requests for extradition;
- (b) The transfer of criminal proceedings;
- (c) The transfer of defendants for the purpose of their fulfilling a penal sentence.
- (d) Assistance to private individuals or third-party states.

Article XI. Execution of the request for assistance

1. In accordance with this Agreement, any investigation conducted by the authorities of the requested State shall be executed in accordance with the laws of this State. The evaluation of the investigation shall be governed by the domestic laws of the requesting Party.

2. The requested State shall establish the date and place of execution of the request for assistance, and shall notify the requesting State thereof, if appropriate.

3. Pursuant to its domestic law and to the request made by the requesting Party, the requested State may receive sworn statements from persons in a case that is proceeding in the requesting State, and request that the necessary inquiries be conducted according to the procedures specified in the request.

4. The list of questions should be submitted in writing, and the requested State shall decide whether or not to proceed, having evaluated it.

5. If requested by the other Party, the requested State may provide copies of official documents, background data or information held in a Government agency or office of that State, for evidentiary purposes.

6. The inquiries undertaken by the competent authorities of the requested State shall be transferred in original form, or as authenticated copies, to the requesting Party through the central authority designated in this Agreement.

Article XII. Service and transmittal of documents

1. At the request of the requesting Party, and insofar as possible, the requested Party shall take action on any summons, service or transmittal of documents relating to, or forming part of, a request for assistance, in accordance with its legal system.

2. The requested State shall provide evidence of having executed the action, in accordance with the request for assistance.

Article XIII. Appearance of witnesses and experts

1. At the request of the requesting State, any person present in the territory of the requested State may be notified or summoned to appear or submit a report to the competent authority, to testify or provide documents, precedents or evidence, pursuant to the legislation of the requested State.

2. Following a request by the requesting State, the central authority of the requested State shall give advance notice of the date and place for receiving testimony or expert evidence.

3. When the requesting State requests the appearance of a person in its territory, to provide testimony or a report, the requested State shall summon or notify the witness or expert to appear voluntarily before the competent authority of the requesting State, without the use of threatening or coercive measures. Should it be deemed necessary, the central authority of the requested Party shall provide written agreement from the person to appear in the requesting State. The central authority of the requested State shall promptly notify the central authority of the requesting State of the reply.

4. If the person summoned or notified to appear, or to submit a report or provide documents, in the requested State invokes immunity, incapacity or privileges under the laws of the requesting State, the latter shall be informed of the plea of that person so that the appropriate measures may be taken.

5. The requested State shall transmit evidence to the requesting State that the summons or notification has been served, specifying how and on what date service was carried out.

When a witness or expert has agreed to co-operate with a request for assistance, the State to which that person is transferred shall take steps to ensure his or her personal safety.

Article XIV. Temporary guarantee

1. No person summoned or notified to appear as a witness or expert in the territory of the requesting State, in response to a request for assistance, may be accused or put on trial, detained, or subjected to any restriction of personal freedom, for acts or omissions he or she may have committed prior to departure for the requesting State.

2. Except in cases of chance or force majeure the guarantee provided for in this article shall expire if, having been notified of the completion of the action for which he or she was requested, the person does not leave the requesting State within 10 days, or, having done so, voluntarily returns to that State.

Article XV. Other evidentiary procedures

The Parties may decide to undertake other evidentiary actions that are available in their domestic laws but have not been mentioned in this Agreement. Any such actions will be processed and executed in accordance with this Agreement.

Article XVI. Costs

1. The ordinary costs of executing a request for judicial assistance shall be borne by the requested State, unless otherwise determined by the States. If substantial or exceptional nature expenses are required to execute the request, the States shall consult one another in order to determine the terms and conditions for execution of the request and the manner in which the costs shall be borne.

2. The fees of experts and the travel, accommodation, subsistence and unforeseen expenses of witnesses or experts who must travel pursuant to a request for assistance, including those of the officials accompanying them, shall be borne by the requesting State.

Article XVII. Final provisions

The central authorities shall hold consultations on agreed dates for the purpose of evaluating the assistance provided pursuant to this Agreement.

The assistance and proceedings provided for in this Agreement are not intended to prevent either Party from assisting the other Party in conformity with the provisions of other international agreements to which they are parties, or their own legislation. The Parties may also provide assistance pursuant to any other currently applicable bilateral agreement, treaty, convention or practice.

Article XVIII. Validity and termination

1. Any dispute which may arise in connection with the interpretation or application of this Agreement shall be settled between the central authorities; in the event of failure to reach agreement, consultation shall take place between the two Parties.

2. This Agreement shall enter into force sixty (60) days after the date on which the Contracting Parties notify each other, through the diplomatic channel, that their domestic requirements have been fulfilled.

3. Either Party may terminate this Agreement at any time by giving notice in writing, through the diplomatic channel, which shall take effect six (6) months from the date on which the other contracting Party receives it.

Done at Panama City on the 19th of November 1993, in two copies in the Spanish language, both texts being equally valid and authentic.

For the Government of the Republic of Colombia:

NOEMÍ SANÍN DE RUBIO
Minister of Foreign Relations

ANDRÉS GONZÁLEZ DÍAZ
Minister of Justice and Law

For the Government of the Republic of Panama:

JOSÉ RAÚL MULINO
Minister of Foreign Relations

JUAN B. CHEVALIER BRAVO
Minister of Governance and Justice

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD RELATIF À L'ASSISTANCE JURIDIQUE ET À LA COOPÉRATION MUTUELLE JUDICIAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA

Le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Panama;

Animés de l'objectif de renforcer l'assistance juridique et la coopération en matière pénale;

Reconnaissant que la lutte contre la criminalité exige de la part des États une action conjointe;

Considérant les liens d'amitié et de coopération qui les unissent en tant que pays voisins;

Respectant les normes constitutionnelles, juridiques et administratives de leurs États ainsi que les principes du droit international, en particulier la souveraineté, l'intégrité territoriale et la non-intervention;

Désireux d'engager des actions communes de prévention, de contrôle et de répression de la criminalité sous toutes ses formes grâce à la coordination d'activités et la mise en œuvre de programmes spécifiques et à la rationalisation des mécanismes classiques d'assistance judiciaire;

Conscients de la recrudescence de la criminalité dans les zones frontières, conviennent de coopérer entre eux de la façon la plus large possible conformément à la procédure ci-après :

Article premier. Objet de l'assistance

Conformément aux dispositions du présent Accord ainsi qu'à leurs systèmes judiciaires respectifs, les Parties contractantes s'engagent à :

1. Se prêter l'assistance juridique et judiciaire de façon réciproque;
2. Fournir la collaboration la plus complète possible s'agissant des mesures d'expulsion, déportation et remise à la justice des étrangers faisant l'objet de poursuites judiciaires qui se trouvent en situation irrégulière dans la zone frontière des États Parties.

Article II. Application et portée de l'assistance

1. Les Parties se prêteront une assistance mutuelle dans l'échange d'informations et de preuves, enquêtes judiciaires, jugements et actions en matière pénale.

Cette assistance comprendra, notamment, les actions suivantes :

- a. L'exécution d'enquêtes judiciaires préliminaires, lorsque la demande en est faite et la communication des résultats;

- b. La transmission de documents et de renseignements conformément aux dispositions du présent Accord;
- c. La notification des décisions de procédure, des ordres et des décisions finales du tribunal;
- d. La localisation et le transfert volontaire de témoins et d'experts aux fins du présent Accord;
- e. Procéder à l'exécution des ordonnances de justice relatives au gel et à la confiscation d'actifs, aux produits et instruments avec lesquels le délit a été commis ou qui découlent de son exécution, conformément au système juridique interne de l'État requis.
- f. L'État requis fera une considération particulière afin de décider, en accord avec l'État requérant, la forme selon laquelle seront répartis, entre les États, tant les actifs confisqués que, le cas échéant, le produit de leur vente et ce en considérant le degré de collaboration apporté et l'information fournie.
- g. L'adoption de mesures facilitant l'entrée sur le territoire de l'État requis et la liberté de mobilité interne de représentants de l'État requérant afin que, sous réserve d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'État requis, lesdits représentants puissent assister à l'exécution des options décrites dans le présent Accord, à condition que le système juridique interne de l'État requis le permette.
- h. Toute autre forme d'assistance dont les Parties peuvent convenir.

Article III. Assistance à la frontière

Outre l'assistance juridique et judiciaire décrite à l'article II du présent Accord, les Parties s'engagent à coopérer dans une très large mesure dans la zone frontière, comme suit :

1. Un ressortissant d'un État Partie qui, à la suite d'une mesure entraînant la perte de sa liberté est recherché par les autorités judiciaires de son pays et qui a pénétré dans la zone frontière de l'autre État Partie contractante afin d'éviter sa capture sera déporté ou extradé du territoire de l'État dans lequel il est présent par les autorités compétentes et sera conduit jusqu'à la frontière pour être remis aux agents de l'État requérant.

La procédure susmentionnée sera mise en œuvre conformément à la législation relative aux étrangers en vigueur dans chaque État et de telle façon que les droits et garanties de la personne intéressée soient toujours respectés.

2. L'autorité centrale d'un État contractant recevant une demande d'assistance la communiquera sans délai au département de contrôle de l'immigration avec les documents pertinents de façon à obtenir leur assistance immédiatement pour l'adoption de mesures visant à expulser ou à déporter la personne étrangère en question et la remettre aux autorités de l'État requérant.

À cet effet, les organismes désignés à l'article IV du présent Accord feront fonction d'autorités centrales.

3. Aux fins de l'assistance visée dans le présent article, la zone frontière sera la zone déterminée par les deux Parties.

Article IV. Autorités centrales

Les demandes d'assistance au titre du présent Accord seront présentées par l'intermédiaire des autorités centrales compétentes, comme indiqué ci-après :

1. L'autorité centrale de la République du Panama sera le Ministère du gouvernement et de la justice.
2. a) La République de Colombie désigne le Bureau du Procureur général comme étant son autorité centrale compétente.
b) Concernant les procédures relatives au gel d'actifs, à la confiscation d'actifs et aux effets découlant d'activités illicites ou liées à ces activités, mises en œuvre à la suite du présent Accord, le Bureau du Procureur général informera le Ministre de la justice et des affaires judiciaires.

Article V. Principe de double incrimination

L'assistance sera fournie lorsque le fait qui la provoque constitue un délit au sens de la législation en vigueur dans les deux États contractants.

Article VI. Confidentialité

1. L'État requis gardera en réserve la demande d'assistance, à moins que sa levée soit nécessaire à l'exécution de la demande.
2. Si la levée de la réserve s'avérait nécessaire pour la mise en œuvre ou l'exécution de la demande, l'État requis sollicitera le consentement de l'État requérant, sans lequel l'exécution de la demande n'aura pas lieu.
3. L'État requérant préservera la confidentialité des preuves et des informations fournies par l'État requis, conformément au présent Accord, à moins que la levée soit nécessaire pour l'enquête judiciaire ou les procédures décrites dans la demande.
4. L'État requérant n'utilisera pas à d'autres fins que celles indiquées dans une demande, les preuves et les informations obtenues à la suite de cette demande, sans le consentement préalable de l'État requis.

Article VII. Refus d'assistance

L'autorité centrale de l'État requis peut refuser l'assistance lorsque, selon elle :

- a. La demande d'assistance est contraire à son système juridique ou n'est pas conforme aux dispositions du présent Accord;
- b. La mise en œuvre d'une demande peut constituer un obstacle à une enquête judiciaire ou une procédure pénale en cours dans ledit État. Toutefois, l'acceptation de cette demande d'assistance pourra être reportée ou soumise à condition sous la forme jugée nécessaire. Dans ce cas, l'autorité centrale de l'État requis le notifiera de la sorte à l'autorité centrale de l'État requérant;

- c. La demande d'assistance a trait à un délit au sujet duquel la personne a été définitivement déchargée de toute responsabilité pénale ou, si elle fait l'objet d'une condamnation, aurait purgé sa peine;
- d. L'enquête judiciaire a été entamée aux fins d'incriminer ou de discriminer sous quelque forme que ce soit une personne ou un groupe de personnes pour des considérations de race, de sexe, de statut social, de nationalité, de religion ou d'idéologie;
- e. La fourniture de l'assistance est susceptible de perturber l'ordre public, la souveraineté, la sécurité ou les intérêts nationaux vitaux de l'État requis;

Quoi qu'il en soit, l'État requis informera par écrit l'État requérant du refus de l'assistance.

Article VIII. Obligations de forme

1. Les demandes d'assistance doivent être formulées par écrit et contenir les informations suivantes :

- a. L'autorité compétente responsable de l'enquête judiciaire ou de la procédure;
- b. L'objet de la demande et la description de l'assistance demandée;
- c. La description des actes constituant le délit à propos duquel l'assistance est demandée, conformément à la législation de l'État requérant. Le texte de la législation applicable doit être reproduit ou annexé;
- d. Les détails et les raisons de tout aspect ou procédure spéciaux que l'État requérant peut souhaiter engager;
- e. La date limite à laquelle l'État requérant aimerait que sa demande soit satisfaite.

2. En fonction de la nature de l'assistance judiciaire demandée, il est également exigé :

- a. Toutes les informations disponibles sur l'identité et la résidence ou le domicile de la personne à localiser;
- b. L'identité et la résidence ou le domicile de la personne devant recevoir la sommation ou la notification et la relation entre ladite personne et la procédure;
- c. L'identité et la résidence ou le domicile des personnes appelées à fournir des preuves;
- d. La description du lieu de la perquisition et des objets à saisir;
- e. Une description des biens pour lesquels le gel ou la confiscation sont demandés ou qui sont réputés disponibles pour le gel ou la confiscation et la relation entre lesdits objets et la personne contre laquelle une procédure pénale a été engagée ou est sur le point de l'être;
- f. Le cas échéant, la description du montant affecté au gel ou à la confiscation;

g. Toute autre information pouvant être nécessaire pour permettre de satisfaire la demande.

3. Si l'État requis juge que les renseignements contenus dans la demande sont insuffisants pour pouvoir y donner suite, il peut demander des renseignements supplémentaires à l'État requérant.

Article IX. Transmission de documents et d'objets

1. Les documents, registres ou objets transmis à l'État requérant conformément aux dispositions du présent Accord sont rendus le plus tôt possible à l'État requis une fois terminée la commission pour laquelle ils ont été requis, à moins que l'État requis ne renonce expressément à ce droit.

2. Les Parties devront protéger les intérêts que des tiers de bonne foi peuvent avoir sur les objets remis à la suite d'une demande d'assistance.

Article X. Limites dans l'application du présent Accord

1. L'État requérant n'utilisera pas des informations ou des preuves obtenues par l'intermédiaire du présent Accord à des fins autres que celles indiquées dans la demande, sans le consentement préalable de l'État requis.

2. Le présent Accord n'habilite pas les Parties à exécuter, sur le territoire de l'État dans lequel les poursuites ont lieu, des fonctions réservées exclusivement aux autorités dudit État conformément à sa législation nationale.

3. Le présent Accord ne s'applique pas à ce qui suit :

- a. Détention de personnes aux fins de leur extradition et demandes d'extradition;
- b. Transfert de procédures pénales;
- c. Transfert des inculpés aux fins de les soumettre à une décision pénale;
- d. Assistance fournie aux particuliers et aux États tiers.

Article XI. Exécution de la demande d'assistance

1. En vertu du présent Accord, les enquêtes réalisées par les autorités de l'État requis sont exécutées conformément au système juridique dudit État. L'évaluation de ces enquêtes est régie par le système juridique interne de l'État requérant.

2. L'État requis fixera la date et le lieu de l'exécution de la demande d'assistance et les communiquera à l'État requérant, le cas échéant.

3. L'État requis peut, conformément à sa législation nationale et à la demande de l'État requérant, recevoir des éléments de preuve de personnes dans le cadre d'une procédure engagée dans l'État requérant et peut demander la présentation des éléments de preuve nécessaires au regard des procédures spécifiées dans la demande.

4. Toutes les questions doivent être posées par écrit et l'État requis détermine leur bien-fondé juridique après les avoir étudiées.

5. À des fins de preuve, l'État requis peut, à la demande de l'État requérant, fournir des copies de documents officiels, casiers judiciaires et autres informations délivrés par un organisme ou une institution gouvernementale dudit État.

6. Les preuves réalisées par les autorités compétentes de l'État requis, sous forme d'originales ou de copies certifiées conformes, sont transmises à l'État requérant par le truchement de l'autorité centrale définie dans le présent Accord.

Article XII. Signification et remise de documents

1. À la demande de l'État requérant et dans la mesure du possible, l'État requis prend des mesures concernant toute assignation, signification ou transmission de documents en rapport avec une demande d'assistance, ou faisant partie de ladite demande, conformément à sa législation nationale.

2. L'État requis fournit les éléments de preuve de l'exécution de l'action conformément à la demande d'assistance.

Article XIII. Comparution de témoins et d'experts

1. À la demande de l'État requérant, la personne se trouvant sur le territoire de l'État requis peut être notifiée ou sommée de comparaître ou de présenter un rapport devant les autorités compétentes, de témoigner, de produire des documents, des précédents ou des éléments de preuve conformément à la législation de l'État requis.

2. À la demande préalable de l'État requérant, l'autorité centrale de l'État requis notifie à l'avance la date et le lieu de réception de la déposition ou du témoignage d'experts.

3. Si l'État requérant demande la comparution d'une personne sur son territoire afin qu'elle témoigne ou présente un rapport, l'État requis somme ou notifie le témoin ou l'expert de comparaître volontairement devant l'autorité compétente de l'État requérant et sans recourir à des mesures comminatoires ou coercitives. Le cas échéant, l'autorité centrale de l'État requis fait indiquer par écrit le consentement de la personne à comparaître dans l'État requérant. L'autorité centrale de l'État requis informe rapidement l'autorité centrale de l'État requérant de la réponse.

4. Si la personne qui est sommée ou notifiée de comparaître, ou de présenter un rapport ou de fournir des documents dans l'État requis invoque l'immunité, l'incapacité ou des privilèges au terme de la législation de l'État requérant, ce dernier est informée de la requête de ladite personne afin que des mesures appropriées puissent être prises.

5. L'État requis communique les preuves à l'État requérant que la sommation ou la notification a été reçue, en spécifiant le mode utilisé pour la sommation ou la notification et la date de ces dernières.

Lorsque le témoin ou l'expert a accepté de coopérer s'agissant d'une demande d'assistance, l'État dans lequel il est transféré garantit sa sécurité personnelle.

Article XIV. Garantie temporaire

1. Aucune personne sommée ou notifiée de comparaître en qualité de témoin ou d'expert sur le territoire de l'État requérant dans le cadre d'une demande d'assistance ne peut être syndiquée ou poursuivie, arrêtée ou sujette à une quelconque restriction à sa liberté personnelle en raison des actes ou omissions commises avant son départ pour l'État requérant.

2. Sauf en cas fortuit ou de force majeure, la garantie prévue au présent article, cesse de s'appliquer si la personne requise n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans les dix (10) jours qui suivent la notification indiquant que sa présence n'est plus exigée ou si, ayant quitté ledit territoire, elle y est retournée volontairement.

Article XV. Autres enquêtes judiciaires probatoires

Les Parties peuvent convenir de la réalisation d'autres enquêtes judiciaires probatoires prévues par la législation nationale et qui ne sont pas indiquées dans le présent Accord. Lesdites enquêtes sont traitées et exécutées au regard des dispositions du présent Accord.

Article XVI. Frais

1. Les frais courants ayant trait à l'exécution d'une demande d'assistance judiciaire sont pris en charge par l'État requis, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Si l'exécution de la requête exige des frais extraordinaires ou considérables, les Parties se concertent afin de déterminer les conditions d'exécution de la requête ainsi que la formule de répartition des frais.

2. Les honoraires des experts ainsi que les frais de déplacement, de logement, de subsistance et les frais afférents aux témoins ou experts qui sont appelés à se déplacer à la suite d'une demande d'assistance, y compris les frais des fonctionnaires qui les accompagnent, sont à la charge de l'État requérant.

Article XVII. Dispositions finales

Les autorités centrales se consulteront à propos des dates convenues en vue d'évaluer l'assistance fournie dans le cadre du présent Accord.

L'assistance et les procédures prévues dans le présent Accord ne visent à empêcher aucune Partie de fournir assistance à l'autre Partie conformément aux dispositions d'autres accords internationaux auxquels les Parties adhèrent ou à leur propre législation. Les Parties peuvent se prêter assistance conformément aux autres accords, traités, conventions ou pratiques bilatérales en vigueur et applicables.

Article XVIII. Durée et dénonciation

1. Tout différend susceptible de survenir à propos de l'interprétation ou de l'application du présent Accord est réglé entre les autorités centrales; à défaut d'un accord en la matière, des consultations ont lieu entre les deux Parties.

2. Le présent Accord entre en vigueur soixante (60) jours après la date à laquelle les Parties contractantes se notifient mutuellement, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs obligations constitutionnelles.

3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment par une note écrite communiquée par la voie diplomatique qui prend effet six (6) mois après la date de sa réception par l'autre Partie contractante.

Fait à Panama, le 19 novembre 1993, en double exemplaire, en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République de Colombie :

NOEMÍ SANÍN DE RUBIO
Ministre des affaires étrangères

ANDRÉS GONZÁLEZ DÍAZ
Ministre de la justice et des affaires judiciaires

Pour le Gouvernement de la République du Panama :

JOSÉ RAÚL MULINO
Ministre des affaires étrangères

JUAN B. CHEVALIER BRAVO
Ministre du gouvernement et de la justice

